

la caja de pandora

ciencia/ tecnología /
innovación productiva



INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
Y EXPERIMENTACIÓN
POLÍTICA





DOCUMENTO DEL ARCHIVO CAMINANTE 2010

INTRODUCCIÓN

SOBRE EL NUEVO CONFLICTO SOCIAL

Desde distintas situaciones concretas está emergiendo un nuevo tipo de conflicto social. Se trata una inédita amalgama de luchas y enfrentamientos, que hemos visto sucederse en los últimos años, aunque permanecen en zona de opacidad mediática y suelen ser relegados por las discursividades políticas (como hechos de la crónica policial referidos al oscuro mundo de lo criminal).

Durante el último año, varios acontecimientos nos obligaron a reaccionar en función de la denuncia y la defensa de compañeros agredidos. *Es a partir de esos intentos por responder a una violencia en auge, que surge la necesidad de develar las coordenadas políticas de esta nueva conflictividad.* En tal sentido se orientan estos Apuntes, así como la investigación militante que estamos emprendiendo con algunos movimientos y grupos hermanos como impulso hacia una renovada capacidad de intervención colectiva.

LA CENTRALIDAD DE LOS TERRITORIOS PERIFÉRICOS

Las áreas rurales, habitadas por campesinos, comunidades indígenas y pequeños productores son el epicentro de una disputa permanente por el territorio. El crecimiento ince-

sante de los agro-negocios demanda la subsunción de cada vez mayor cantidad de hectáreas en pos de la multiplicación de enclaves para los cultivos. Cientos de conflictos de baja intensidad transcurren a diario, pero allí donde mayor organización social existe los enfrentamientos adquieren un carácter peculiar derivado del tipo de resistencia frente a los avances de la frontera agropecuaria. Es el caso de Santiago del Estero, donde dos campesinos del MOCASE fueron asesinados en un año por sicarios a sueldo de los empresarios sojeros, con la anuencia de sectores políticos y judiciales. Situaciones de similar conflictividad se viven en otras regiones del país en torno a las industrias extractivas como la minería y el petróleo.

En paralelo, la irrupción del narcotráfico en las principales ciudades ha modificado los modos de vida en sus zonas conurbanas. Los barrios marginales y los nuevos asentamientos constituyen espacios estratégicos para la instalación de segmentos logísticos esenciales en el negocio de las drogas. Buena parte de la población villera, especialmente los jóvenes, es incluida en las redes de tráfico, venta y almacenamiento. Entre las organizaciones sociales y las redes narcos han comenzado a desarrollarse enfrentamientos violentísimos muy difíciles de prever y de contener. Los múltiples ataques (con varios muertos) sufridos por distintos movimientos populares en Rosario se suman a los frecuentes incidentes padecidos por compañeros del sur y el oeste bonaerense.

El centro neurálgico de estas disputas tiene lugar en las periferias rurales y de las grandes ciudades, pero afecta a los más importantes procesos de valorización capitalista que se despliegan en la actualidad. Las investigaciones universitarias, periodísticas y judiciales aportan información sobre los hechos de violencia, pero no logran componer una interpretación de lo que está en juego. Sólo la construcción de una hipótesis política colectiva puede hacer frente a esta modalidad contemporánea de despojo y explotación.

CAPITAL RENTÍSTICO Y EXTRACTIVO

Partiendo de las resistencias concretas es posible entrever la conflictividad específica y la lógica de funcionamiento de los esquemas de negocios que procuran consolidarse. Los agro-bussines, la minería, la industria petrolera, el narcotráfico, son sectores que tienen en común varios aspectos significativos. Cada una de estas ramas de la producción ha conocido un crecimiento exponencial luego de la crisis global del neoliberalismo, que tuvo su inflexión argentina en el año 2001. Se trata de actividades que se han visto beneficiadas por el modelo de desarrollo vigente y en algunos casos constituyen verdaderos pilares del andamiaje macroeconómico actual.

Este tipo de negocios revelan la naturaleza de un capitalismo que se sustenta en la captura de renta extraordinaria. Argentina se ha beneficiado por su inserción en los mercados globales de commodities, gracias a los cuales adquiere ganancias considerables surgidas de la especulación financiera con los recursos naturales y los alimentos. Se trata de una bonanza netamente coyuntural (nadie sabe cuándo cambiará el objeto de la especulación) y particularmente perversa (incluir en la timba los alimentos y bienes comunes es un umbral irreversible). Además, ese plus rentístico que ingresa al país y se vuelca en los territorios a la caza de nuevos negocios, que apuntala las cuentas públicas y engrosa el consumo masivo, es una riqueza que no ha sido producida en Argentina. Estamos, entonces, ante un comportamiento rentístico a escala global del que participa toda la sociedad aunque, claro, existan sujetos particularmente beneficiados por estas lógicas.

El carácter *extractivo* de los negocios mencionados es un índice de hasta qué punto el proceso de valorización en curso requiere subordinar y explotar o directamente destruir los tejidos sociales existentes. Acumulación por desposesión, es otra manera de referirse a este patrón de negocios que

incauta los bienes comunes a cambio de ganancias dinerarias siderales. El resultado es una desarticulación social y comunitaria que, sin embargo, se beneficia con un aumento general de los ingresos. Este incremento de la capacidad de consumo popular no significa, sin embargo, un horizonte de enriquecimiento colectivo o de igualdad social.

En los desalojos a los campesinos del Mocase a manos de los sicarios de la soja; en los desplazamientos de las organizaciones barriales por la presencia narco; en las agresiones a comunidades indígenas como La Primavera de Formosa, por parte de testaferros ligados al gobierno provincial; o en las operaciones políticas que buscan dividir a los pueblos que lindan con yacimientos petrolíferos y mineros, lo que se ataca es la red o infraestructura común que, por un lado obstaculiza la acumulación, y por otro resiste la subordinación.

Una vez desmembrada o subsumida la dinámica comunitaria, los diferentes complejos empresariales logran refuncionalizar aquellos saberes y capacidades, ahora fragmentados, en función de su propia logística de negocios: contratando pibes-soldados, sicarios, agentes de control territorial; financiando ciertos consumos; estableciendo depósitos y corredores regionales; instrumentalizando los lazos familiares y las fronteras nacionales.

LA GOBERNABILIDAD: UNA DIALÉCTICA ROTA

La existencia sostenida de una renta extraordinaria y la disputa por su captura y distribución, es el cuerpo que soporta la nueva imagen (tan retórica como real) de la intervención estatal, núcleo duro del proceso de legitimidad política del presente. El flujo dinerario como nervio racional de la épica populista.

Esta dinámica del capitalismo financierizado se ramifica, en condiciones de hegemonía neo-desarrollista, según un doble andarivel: *por abajo, alimenta dinámicas de consumo y endeuda-*

miento popular que hacen posible un tipo de inclusión más allá del mundo del empleo; por arriba, permite un fondeo de recursos que a esta altura resulta irremplazable para el funcionamiento de las agencias estatales.

La ciudadanía por consumo que emerge en este panorama es un híbrido difícil de digerir para las instituciones públicas. Por una parte es el efecto buscado por los imaginarios anti-ajuste y anti-austeridad, expresados en el inédito crecimiento de los subsidios; pero a la vez, se intenta recodificar desde una “moralidad de la pobreza” los efectos de desborde que el crecimiento del consumo y la movilidad social genera.

La composición social resultante es inestable y por momentos explosiva. Cuando irrumpe casi siempre lo hace por exceso: de los saqueos y otras formas de violencia desde abajo, a las catástrofes que muestran el fondo de precariedad en que vivimos.

Esta doble cara parece explicar también el desdoblamiento de las instituciones en circuitos paralelos, que se entrelazan: uno de carácter legal y “blanco” que opera según reglas explícitas; el otro ilícito y “oscuro”, históricamente regido por códigos tácitos.

La misma duplicidad puede hallarse en el abordaje estatal de los nuevos conflictos sociales: mientras en los territorios en disputa segmentos enteros de los poderes policiales, judiciales y políticos se articulan con los negocios extractivos; en ciertos estamentos ministeriales existen áreas y funcionarios que acuden con la intención de morigerar los daños. Los organismos del estado, en sus diferentes niveles, aparecen comprometidos tanto en la producción del desastre como en el momento de su reparación, sin que pueda atribuírsele un sentido unívoco en la realidad actual.

PÚBLICO Y PRIVADO: EL CONOCIMIENTO

Si bien los territorios considerados periféricos adquieren centralidad en la cartografía de la valorización y del conflicto actual, eso no significa que la esfera pública urbana se mantenga a distancia. El virus rentístico penetra instituciones y atraviesa distintos estratos de la sociedad. Del microcrédito en pequeña escala a los fideicomisos inmobiliarios o los bonos soberanos, la matriz monetaria se expande en función de tres procedimientos generales: la deuda, la especulación y el subsidio.

La lógica extractiva interviene, de este modo, en la captura de una variedad de recursos sociales (ya no solo naturales): succiona los ahorros de la población, absorbe el dinero negro surgido en los negocios ilegales, regula las formas del consumo masivo. Y, lo que resulta más novedoso, supedita en función de sus esquemas organizativos a las agencias públicas del conocimiento, como las carreras universitarias y los institutos del Conicet vinculados a la bio-economía.

La primera edición de estos *Apuntes del nuevo conflicto social* está íntegramente dedicada a cuestionar la subsunción del conocimiento por parte de la empresa neo-desarrollista, gracias a la esforzada gestión del Estado Nacional. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desempeña un papel clave en el incentivo a la investigación y la experimentación con materias primas tecnológicamente asistidas y genéticamente modificadas, más allá de sus narrativas ancladas en los imaginarios de la autonomía científico-técnica tercermundista.

Invitamos al investigador Andrés Carrasco y al profesor Carlos Carballo a discutir en la Cazona de Flores la profundidad y los matices de lo que, con elegancia, se ha dado en llamar “la investigación aplicada”. El primero ha conocido y aún hoy sigue padeciendo el rigor del pensamiento hegemónico en el campo de la Biología, desde que sus experimentos en el laboratorio demostraron las malformaciones ocasionadas

por el glifosato en la morfología de los embriones animales. El segundo se dedica afanosamente a construir un foro de debate (la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria) en el seno de una Facultad de Agronomía de la UBA acostumbrada al mutismo cómplice con la aplastante supremacía de los agro-negocios. Sus disertaciones fueron transcritas y convertidas por ellos mismos en textos para esta publicación.

Cuesta encontrar hoy funcionarios estatales o universitarios que pongan en primer plano la producción de conocimiento crítico, por encima del utilitarismo economicista y del interés coyuntural. Casi imposible resulta hallar tal especimen en el campo de las ciencias. Por eso constituye un raro privilegio publicar el diálogo que mantuvimos con el matemático Marcelo Ruíz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Por último volvemos al inicio, a la preocupación que originó esta indagación colectiva, surgida de los compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC), en un encuentro con diversas experiencias donde se dieron los primeros pasos para la fundación del Instituto de Investigación y Experimentación Política. Según Diego Montón, miembro del MNCI-VC, la cooptación por parte del complejo agroexportador y minero de las Universidades Públicas y los organismos estatales dedicados a la investigación y la innovación tecnológica, constituye una pieza clave del modelo de desarrollo vigente. Y sólo será posible construir alternativas de vida y producción en los territorios campesinos, si se modifica la relación de fuerzas en el plano del saber, la tecnología y la política. Para conseguirlo, es preciso liberar toneladas de imaginación crítica. Ojalá estos Apuntes aporten al menos una pizca en ese sentido.



FOTO: EDUARDO MOLINARI 2013

NEO-COLONIALISMO DE LA SUBJETIVIDAD

**UNA CONVERSACIÓN CON CARLOS CARBALLO
Y ANDRÉS CARRASCO**

¿Cómo se expresan en el nivel académico las disputas por el modelo alimentario? ¿De qué manera las tecnologías y los saberes “de punta” contribuyen al crecimiento de las fuerzas productivas, reconfiguran las formas de valorización y determinan una cierta imagen de la felicidad? ¿Existen elaboraciones alternativas capaces de proponer otro modo de producción y de consumo distinto al desplegado por los agro-negocios?

Es difícil refutar el acoplamiento de las universidades y los centros de investigación públicos al sistema productivo, especialmente cuando la estructura económica se concentra y trasnacionaliza cada vez más. ¿Cómo hacerlo cuando el financiamiento proviene de unos entramados de negocios que son precisamente los que demandan el saber y la innovación? Se requiere desplegar una nueva función crítica, capaz de plantearse escenarios de cuestionamiento a tal orientación, e inventar mecanismos de lectura que puedan dar cuenta de la nueva generación de conflictos sociales.

No se trata sólo de conocer y denunciar el problema. Hay una dimensión política que afrontar. Los científicos están al tanto de la “nueva barbarie” que se está instalando. El hecho de ser investigador y trabajar en una institución pública no garan-

tiza la crítica. Y no todo depende únicamente de los vaivenes de gobiernos que gestionan lo existente y, a lo sumo, discuten matices de un modelo productivo que goza de un amplio consenso.

Las catástrofes parecen ser los únicos momentos donde aflora el debate: las inundaciones, los choques de trenes y otros siniestros que ponen sobre el tapete las grietas del modelo socio económico y sus tópicos de inclusión social. Como si en la universidad no hubiera otras matrices de pensamiento, capaces de problematizar la dimensión subjetiva, en torno al consumo que moviliza deseos, que arma redes y construye imaginarios, y que ensambla muy bien con este proyecto científico y económico. Los consumidores parecen ser ganadores paradójicos: tienen más plata en el bolsillo, pero sus condiciones de vida se deterioran a un ritmo acelerado.

Si nos limitamos a considerar la hegemonía del modelo neo-desarrollista como un cuento de terror, meticulosamente armado y cristalizado, donde cada cosa está articulada de un modo perverso con el objetivo de engañar, cooptar y manipular, se nos hace difícil problematizar, intervenir, encontrar grietas, construir líneas de fuga.

A partir de estas preocupaciones les propusimos al biólogo Andrés Carrasco y al ingeniero agrónomo Carlos Carballo, iniciar un mapeo conceptual de las políticas científicas que priman en nuestro país, develando las articulaciones concretas que se establecen entre el desarrollismo basado en los commodities y las instituciones del conocimiento dependientes del Estado.

CARLOS CARBALLO

PROFESOR DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UBA,

DONDE COORDINA LA CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA (CALISA)

Agronomía es una Facultad con una relación muy fuerte con el mundo de los agro-negocios. De hecho, el Plan de Estudios de la carrera de ingeniero agrónomo está orientado claramente hacia ese sector, lo que constituye una fuente de financiamiento nada despreciable. Esta subordinación del conocimiento al desarrollo de los agro-negocios fue una ideología prácticamente hegemónica en las últimas décadas, situación que empieza a cuestionarse con la conducción de la facultad que asume hace cuatro años; la misma manifiesta una mayor preocupación por los actores sociales, miradas y conocimientos ausentes en los planes de estudio, asumiendo que la universidad pública debe ser un lugar de debate de todas las ideas, como parte de su tarea de formación y compromiso con la transformación de la sociedad.

A este nuevo escenario no se llega accidentalmente; integrantes del nuevo equipo de gobierno venían apoyando trabajos de investigación con organizaciones campesinas; los alumnos de nuevas carreras –la Licenciatura en Ciencias Ambientales, por ejemplo– potencian el tratamiento de temáticas hasta hace muy poco marginales. El “Conflicto entre el Campo y el Gobierno” por la Resolución 125 en 2008, que buscaba reorientar el esquema impositivo respecto a los negocios del cultivo, pone en discusión la cuestión de las “políticas agrarias” y su tratamiento, mientras el activismo estudiantil se esforzaba en mostrar la presencia de otro “campo” y otro país. Sin embargo, es posible que la clave de este cambio sea el reconocimiento de los impactos ambientales provocados por el modelo agrario hegemónico.

Conociendo la prédica que veníamos realizando desde hace años, el Decano nos invita a presentar una propuesta de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Su aprobación en el Consejo Directivo, por unanimidad, constituye un indicador que plantea dos temas de reflexión acerca de cómo fue visua-

lizada la propuesta por la comunidad de la facultad: por un lado, expresa el limitado nivel de politización existente, ya que incluso votaron sin reparos representantes conspicuos de la ideología y los programas directamente vinculados a los agro-negocios; por otra parte, muestra el desinterés o la subestimación de las consecuencias del posible accionar de una Cátedra Libre, marginal en su temática y sin recursos económicos.

Enfrentamos el desafío de ser “fundamentalistas”, o bien ir avanzando gradualmente, reconociendo y potenciando las inquietudes ya presentes en distintos sectores de la FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires). Optamos por ser prudentes; no nos engañamos con los “espacios” que tenemos, más allá del respaldo de las autoridades. Fuimos descubriendo los límites, pero también la cantidad de gente crítica que hay en la Facultad respecto de algunas características o consecuencias del “modelo” agrario y agroalimentario, aunque quizás no cuestionen la esencia o su razón de ser.

Tres preguntas nos permitirán sintetizar estos dos años de trabajo: ¿Qué nos propusimos? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cuál es el aprendizaje realizado?

¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En una Facultad donde se debate poco el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo, y menos aún el desarrollo como concepción, la atención del “hambre en el mundo” sigue siendo la preocupación manifiesta de muchos, incapaces de reconocer sin embargo los problemas de pobreza de nuestro país, incluso con la referencia cercana de la crisis del 2001-2002. Existe, entonces, cierta preocupación por la sustentabilidad de los sistemas productivos, cuya evolución sería autónoma del desarrollo de un Sistema Agroalimentario Argentino, profundamente interrelacionado con el Sistema Agroalimentario Mundial. Parece lógico, en este sentido, que los alimentos sean una mercancía más, cuando la tecnología se ve como objetiva y neutra y no se debate la estructura agraria y los múltiples conflictos en los territorios que se derivan de ella.

Ahora estamos tratando de discutir sobre el último desastre climático a partir de las inundaciones, y muy pocos docentes toman la posta. Este modelo que se fue implementando desde hace 50 años con la “revolución verde” y profundizando con los transgénicos, a partir de 1996 permea todo el sistema productivo alcanzando también a los agricultores familiares y campesinos. Este es el modelo apoyado activa o pasivamente desde el Estado y cuya continuidad está planteada claramente en el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial 2010-2020, presentado hace poco tiempo por el gobierno, sin asumir el nivel creciente de concentración y extranjerización del Sistema Alimentario en su conjunto, el deterioro ambiental y los daños en la salud humana que el mismo provoca.

Con este diagnóstico de referencia, nos propusimos incorporar el debate acerca del “derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos –el agua incluida– a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población”, esto es, la Soberanía Alimentaria en la concepción inicial de Vía Campesina¹. Para lograrlo, procuramos contribuir al debate del rol de la comunidad de la FAUBA en el desarrollo sustentable, articulando los saberes, servicios y propuestas desarrollados por sus docentes e investigadores con las demandas sociales; al conocimiento de los problemas que enfrentan la agricultura familiar, el sector agropecuario y la alimentación popular; al análisis y difusión de alternativas que permitan avanzar hacia la Soberanía Alimentaria, aportando a la formulación de políticas públicas que defiendan el derecho a la alimentación, al trabajo y a la vida.

1 “La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo”. Así se definen ellos mismos, en su web: <http://www.viacampesina.org> Fue fundada en 1993 y reúne 150 organizaciones de América, África, Europa y Asia. Se define como autónomo, pluralista y multicultural. En Argentina está representado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

¿CÓMO LO LLEVAMOS ADELANTE?

Organizamos planes de investigación, formación y extensión-comunicación, que se fueron integrando gradualmente entre sí tratando de articular con otras líneas de trabajo e iniciativas que ya se estaban desarrollando en la facultad. La estrategia fue tratar de “instalar” la Soberanía Alimentaria, reconociendo que la misma se alcanzará mediante un trabajo en muchos frentes y que nuestro principal aporte es emprenderla en nuestra cotidianeidad.

¿CUÁL ES EL APRENDIZAJE REALIZADO?

Era correcta nuestra percepción de que estamos en una Facultad que está cambiando, más atenta a las demandas sociales y con mayor disposición a participar en espacios respetuosos y pluralistas. No obstante, pese a que muchos docentes-investigadores están trabajando sobre los impactos o consecuencias del “modelo”, no estamos pudiendo construir un pensamiento alternativo claro. Podríamos decir que la FAUBA –como otras Facultades de Ciencias Agrarias del país– es una “facultad del agro-negocio” porque no fuimos capaces de pensar y proponer modelos distintos. Ni siquiera vislumbramos las políticas necesarias para salir de la “sojización”.

Sin embargo, el acercamiento a la realidad dada por una mayor articulación de viajes, pasantías, proyectos de investigación y extensión, cursos, foros y debates en la propia Facultad facilitó la comprensión y toma de posición ante conflictos de magnitud que se están produciendo en zonas de “avance de la frontera” agrícola y territorios de pueblos indígenas. Hubo todo un conjunto de iniciativas: Declaraciones propuestas al Consejo Directivo donde se manifestaba la solidaridad de la FAUBA con movimientos campesinos sometidos; la conformación de grupos de estudio y trabajo sobre Agricultura Familiar y pueblos qom de la Región Chaqueña es un ejemplo de la constitución de espacios de trabajo interdisciplinario que alcanzaron un grado de formalización creciente con componentes de todos los claustros; el servicio de información a organizaciones sociales sobre avance del

desmonte en Salta, en base a información satelital, es otro ejemplo de este tipo de participación de algunos segmentos de la Facultad en la conflictividad social actual.

La violencia, y también las múltiples y diversas formas de resistencia que se generan a todos los niveles, hizo que numerosos técnicos de las Universidades y del INTA –en caso de ser consultados sin censura– estuvieran de acuerdo en potenciar formas alternativas de producción, ya que si bien no hay condiciones políticas para que las pequeñas iniciativas tomen otra escala, hay ejemplos de que “es posible”. Esto no quiere decir que sólo de esta forma vayamos a transformar el modelo pero sí que tenemos la obligación de repensarlo en el marco de la sumatoria de crisis que muchos observan a nivel mundial: la energética, la alimentaria, la económico-financiera, el Cambio Climático Global. Son señales de que estamos ante una crisis de alcance civilizatorio.

La Soberanía Alimentaria, paradigma incorporado recientemente al debate internacional, debe ser enriquecida con nuevas contribuciones teóricas en el caso de países que, como Argentina, son tradicionales productores excedentarios de alimentos. Ello requiere en forma urgente:

a) caracterizar con más precisión la realidad indígena, campesina, de la agricultura familiar y sus múltiples contribuciones; no sólo se deben considerar sus producciones sino su “multifuncionalidad” en los territorios. La valorización de su capacidad para producir alimentos sanos nos parece correcta, pero debe mejorar sustancialmente. Estas agriculturas y familias agricultoras han ganado visibilidad pero no han conquistado avances significativos en cuanto a su “viabilidad”, considerando, a la vez, que las políticas públicas que apoyen estas experiencias distan de ser las necesarias.

b) no es suficiente conocer quién, cómo y dónde se producen los alimentos, sino también quién, cómo y dónde se los “consume”. Se debe reconocer el rol del “consumidor”/ciudadano responsable, organizado como actor clave en la transformación del Sistema Agroalimentario. En un país en que más del 90% de la población es urbana, el Sistema Agroalimentario

no va a cambiar si no se mejora la comprensión de la población; no habrá reforma agraria, por ejemplo, si no crece la conciencia de las organizaciones sociales y políticas urbanas acerca de la concentración –y extranjerización– de la tierra, del agua, de las semillas, de los alimentos, del deterioro ambiental y su salud presente y futura.

El trabajo coordinado con el “Seminario de Derecho a la Alimentación” de la Facultad de Derecho y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que abrió la Facultad de Medicina, a instancias del Centro de Estudiantes de Nutrición, permiten enriquecer la comprensión de la problemática del acceso a los alimentos saludables.

Finalmente, las preguntas se han multiplicado: ¿cómo construir espacios que permitan debatir la transición de este modelo agrícola a otros modelos? ¿Es factible la convivencia entre el modelo del agro-negocio y el alimento mercancía con otras formas de producción y consumo? ¿Se pueden pensar otros modelos agrícolas sin pensar en otra organización del Sistema Agroalimentario? ¿Cómo generar los alimentos de la calidad que necesitan nuestros pueblos? ¿Cómo apoyar experiencias alternativas de manejo respetuoso del ambiente, generadoras de alimentos sanos, trabajo digno, vida con esperanza? Estos modelos de producción agroecológica ¿pueden desarrollarse si paralelamente no crecen alternativas de economía social y solidaria para la circulación y el consumo de alimentos? ¿Qué tipo de ciencia y tecnología –de científicos y tecnólogos– se requiere para ello? ¿Qué nuevas formas de conocimiento hay que desarrollar? ¿Qué nuevas formas de diálogo deben establecerse?

En la universidad empezamos, con un grupo de once docentes, un programa en Cañuelas. Allí se logró que sea declarada la primera zona de la ciudad donde se prohibieron los agroquímicos. Esto nos muestra que hace falta articular una inteligencia colectiva capaz de problematizar e intervenir en diferentes instancias para desmontar este modelo de producción que destruye otras posibilidades de vida.

ANDRÉS CARRASCO

ES PROFESOR DE EMBRIOLOGÍA EN LA FACULTAD
DE MEDICINA DE LA UBA E INVESTIGADOR DEL CONICET

La Universidad en general, pero sobre todo la UBA, ha cedido ante un discurso que tiende a transformar el uso del saber en pos de la legitimación del relato hegemónico. Los años noventa hicieron un “buen” trabajo. El modelo de producción vigente en Argentina no queda solamente en la circunstancia de lo económico y lo agrario; implica una decisión política que requiere domesticar y cooptar las instituciones que concurren a sostener el modelo. De ellas, la Universidad y los organismos ejecutores de ciencia y técnica son los pilares. El concepto de la “sociedad del conocimiento” es una definición formulada en los noventa por el Banco Mundial, que implicó una idea de sociedad como sinónimo de empresa. Hoy estamos, sin embargo, en una nueva etapa del neoliberalismo, pues ya no se trata de privatizar-destruir lo público sino de cooptar el sentido de los significantes. Las nuevas formas de ocupación de territorios tienen su origen en los años sesenta, cuando empiezan a formularse los actuales mecanismos de control: control social, control de la subjetividad y control de territorio. La palabra es clave: control. Si durante las dos últimas décadas del siglo pasado el Estado cedía las instituciones, hoy el Estado minimizado, desprovisto de mecanismos de regulación, es puesto a producir. Ya no se pretende destruir las Universidades, porque conviene apropiarse de ellas y de los saberes que se generan en función de este modelo. La destrucción de las instituciones públicas se correspondió con una etapa preparatoria de lo que vivimos hoy. Felipe Solá no hubiera podido aprobar, como Secretario de Agricultura en los noventa, la introducción de semillas transgénicas sino en esas condiciones políticas. Pero, una vez introducido, el modelo de agro-negocios necesita de recursos que sostengan con nuevos saberes las tecnologías que lo hacen posible. También precisa la existencia débil, pero residual, de las instituciones que las provean.

Las tierras no están en manos de la burguesía nacional porque el diseño y el control del modelo está en manos extranjeras (véase el informe de la CEPAL para Latinoamérica y Caribe 2012). No podemos tener un modelo político que se deja penetrar por las modulaciones tecno-productivas del capital extranjero, sometién dose al sentido que produce, y al mismo tiempo pensar que avanzamos en construir soberanía y autonomía. La clave de la penetración es la tecnología, aunque se adosen todo tipo de relatos virtuosos. El modelo se sustenta en una decisión política cuyo instrumento central es la tecnología. Eso es lo que hay que mirar críticamente.

Poner el acento en la tecnología es cuestionarla desde la propia lógica de la ciencia. Si la biología molecular usa determinados instrumentos, técnicas, manipulaciones para generar semillas transgénicas que son la piedra del escándalo en el debate planetario (además de los agroquímicos), tenemos que pensar cómo esa tecnología asegura (o no) a la humanidad y a la naturaleza, en lugar de enfrentarnos a la incertidumbre biológica derivada de los problemas que la tecnología esconde. La biotecnología que permite el monocultivo, que afecta la biodiversidad, está construida sobre el éxito económico, no sobre la certeza de las consecuencias de la totalidad del proceso productivo. Eso pone en tela de juicio su estabilidad y abre situaciones impredecibles hacia el futuro.

Dejando de lado el modelo, las semillas transgénicas son *per se* un peligro para el equilibrio natural de las especies y además un peligro potencial; porque cuando uno manipula un organismo vivo se abre una caja de pandora. En los 90 la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud, decidieron que los alimentos provenientes de cultivos transgénicos eran equivalentes a los tradicionales no transgénicos.

Esta “equivalencia sustancial de los alimentos transgénicos” sirvió para que no hubiera que desarrollar una normativa diferencial para los OGM (Organismos Genéticamente Modificados). Nunca se ha discutido en nuestro país, tercero en la producción mundial de alimentos, con 24 millones de hectáreas dedicadas a OGM, la validez de la equivalencia sustancial.

Hoy sabemos que los OGM introducen en los animales que se han alimentado con ellos (maíz Bt o soja transgénica) alteraciones metabólicas que es difícil predecir a dónde llevarán en un futuro. Estas evidencias nos hacen cuestionar directamente el transgénico, más allá de los agroquímicos usados para su cultivo. No se ha estudiado qué pasa funcionalmente cuando se introduce un gen extraño, al azar, dentro de un cultivo, alterando su equilibrio que data de 1500 a 2000 años de evolución. No sabemos si esa introducción abre un riesgo biológico, alimentario, ecológico.

Los alimentos nos transfieren elementos que se ponen en relación con nuestro equilibrio biológico, y existe un proceso entre los alimentos y sus consumidores que lleva miles de años de evolución. Alterar ese equilibrio es un camino azaroso e incierto por su complejidad. No es razonable inventar variantes nuevas de granos y liberarlas al campo, si no tenemos información de la evolución de su comportamiento en largos períodos de tiempo. Porque la evolución no trabaja sobre medidas pequeñas de tiempo, sino en plazos extensos: tiempo requerido para las variantes y modificaciones fenotípicas de largo plazo. Pero esto no importa en el comercio global, donde el éxito inmediato de un producto en el mercado es lo que cuenta. El largo plazo de los tiempos biológicos y su manifestación en el concierto natural es un problema de la humanidad y no de las empresas que dicen, mintiendo, que este modelo de producción de alimentos es la salvación respecto al hambre en el mundo.

Lo peor es que los biotecnólogos saben todo, saben cuál es el riesgo (ver *Nature* del 29 de julio 2010 y 2 de mayo 2013). Las técnicas de transgénesis fueron impuestas como promesa de un mundo nuevo que resultó una falacia. Los científicos ocultan información para no debatir. Alimentando con maíz transgénico (el NK603, por ejemplo, que querían introducir en Francia) a ratas, se las induce a un envejecimiento acelerado. La modificación transgénica, aparentemente inocua, es un potencial peligro, y esa sospecha debe, sin dilación, activar el principio precautorio: ese maíz no debería ser trasla-

dado al campo, porque su producción está sospechada de no ser sustancialmente equivalente y potencialmente capaz de alterar metabolismos con peligro de inducir enfermedades. Esto abre una discusión más amplia que trasciende la toxicidad comprobada de los agroquímicos.

Hay ya once países de Europa que decidieron no autorizar transgénicos en sus territorios. Alemania está en una profunda discusión sobre a quién comprar soja para forraje de pollos y cerdos. Y esto es porque hay una presión en la demanda del consumidor que comienza a preferir la carne y productos libres de transgénicos. Entonces, si este cuestionamiento existe y circula en el mundo, ¿por qué no habilitamos el debate? Incluso más allá del modelo, ¿qué tipo de alimentos estamos fabricando y consumiendo? Sabemos que no hay soja sin glifosato adentro, entonces, además de comer alimento no equivalente al natural, estamos comiendo o vendiendo un alimento contaminado con agroquímicos. ¿Por qué Monsanto insiste en introducir la resistencia a uno de los componentes del agente naranja en las nuevas semillas transgénicas que entrarán al mercado? No puede ser que no podamos discutir qué semillas usamos, cómo las usamos y para qué las usamos.

Brasil, el segundo productor de soja del mundo, es todavía el primero en la producción de soja no transgénica. Y si dentro de poco la evidencia comienza a torcer los mercados demandantes hacia los granos no transgénicos, ¿hay un plan alternativo para la soja OGM y el maíz OGM que producimos en el país, el 100 por ciento de la producción total en el caso del poroto verde y el 98 por ciento en el caso del maíz? En Europa el consumidor cuestiona aspectos del capitalismo, pero no propone alternativas. Cuando llegue el momento en que los europeos dejen de comprarnos granos, el país más impactado va a ser Argentina porque es el que más depende de la renta de la soja. Por eso hay que pensar en términos de consumo, pero también en términos del control del territorio. Por otra parte, todos hablamos del modelo productivo, pero nadie habla del impacto sobre los diez millones de perso-

nas que viven en los territorios donde se usan cada vez más agroquímicos. Actualmente somos un campo experimental de nuevas semillas que vienen con nuevos agroquímicos, que producen terribles efectos en ratas y probablemente en humanos. El Ministerio de Agricultura aprobó once semillas nuevas en un año, cinco de las cuales combinan la resistencia al glifosato con un nuevo herbicida, el glufosinato de amonio, más tóxico que el primero. Se aprueban semillas resistentes, sabiendo que Bayer las acaba de retirar de Alemania, y que al mismo tiempo construyeron una planta cerca de Colonia para venderlas a Sudamérica.

Este modelo lleva al conflicto. Porque, como dice un amigo uruguayo, para el modo de producción y explotación de bienes comunes “sobra gente” en nuestros países. Para controlar un territorio hay que desocuparlo. ¿Cómo se avanza en la frontera para terminar la conquista? Porque se buscan territorios para experimentación, algo que solo pueden hacer en regiones donde hay permisividad. Es evidente que esa permisividad de los gobiernos, que ceden autodeterminación, determina la aceptación de modelos que implican la penetración tecnológica. Si hay una tecnología que vulneró la soberanía alimentaria y el control de territorio fue la de los transgénicos, sin más recaudo que una resolución firmada a las apuradas. En Brasil no los dejaron y terminaron entrando por contrabando. Acá aceptaron sin más que el modelo era virtuoso y que la tecnología era buena en sí misma. Eso expresa lo más terrible de la etapa: el neocolonialismo de la subjetividad. No hay otro camino que descolonizar el saber para descolonizar el poder.

Por eso la mirada crítica en la tecnología implica cuestionar el punto central, el lugar donde el relato se sostiene para decir que no hay peligro, que estamos evolucionando con formas de desarrollo inocuas. El Ministro de Ciencia dijo “*estamos ahorrando miles de años de evolución*”. Esa frase, más allá de ser una falsedad científica, es parte de una construcción de un relato que no escribe él, sino aquellos que están sentados en las oficinas de marketing de las mega empresas. Es el

mismo ministro que habla de Oscar Varsavsky²⁰, desarrollando una falacia legitimadora y anticientífica. Tal construcción del relato y del sentido, va acompañada por un proceso de cooptación, neutralización, y vaciamiento de otras narraciones. Y cuando no logran obturar el debate, hay censura. A mí me han censurado cinco o seis veces ya, y me siguen censurando dentro del sistema académico. Hay un control férreo, que se va a resquebrajar como cualquier control. Tal vez la naturaleza genere situaciones imprevisibles que marquen una ruptura y se abran nuevas discusiones. La palabra soberanía aparece nuevamente en los discursos: ¿qué soberanía? Toman el discurso de los pueblos originarios, por ejemplo, para usarlo con otro significado. La Presidenta, el 25 de Mayo del 2010, les dijo a los representantes de los pueblos originarios: *“los vamos a apoyar en todo, pero el modelo no se discute”*. Fue suficiente para que las protestas sean cuidadosamente reprimidas usando fuerzas locales y de gendarmería, criminalizando los conflictos que surgen de la imposición del modelo extractivo.

Las luchas de los pueblos originarios están asociadas al ambientalismo. Ahí encontramos a Evo Morales, un gran defensor de esas reivindicaciones en Bolivia, construyendo un extractivismo asociado a los pueblos originarios. Quienes tendrían que habilitar un debate colectivo y sincero, en realidad están buscando la manera de desarmar el discurso cuestionador.

Hace poco tuvimos el lanzamiento de la Planta de Pilar donde se producirán anticuerpos monoclonales. Un emprendimiento de Hugo Sigman, ex militante del Partido Comunista que hizo mucho dinero en España, y al volver acá comenzó a fabricar vacunas; se asoció con Biogénesis y tiene una productora de cine (que hizo “Plata quemada”). También es dueño de la franquicia local del “Le Monde Diplomatique” y

20 Oscar Varsavsky fue un notable científico y epistemólogo argentino. Docente de la Universidad de Buenos Aires, también enseñó en Caracas cuando tuvo que exiliarse en los años sesenta. Protagonista de una ciencia latinoamericanista de raigambre humanista, Varsavsky fue un activo crítico de la separación entre las ciencias duras y las ciencias sociales, y también de la relación entre ellas y el capitalismo.

posee innumerables propiedades. En la inauguración estuvieron todos: Cristina Fernández de Kirchner, el Ministro de Ciencia y Técnica Lino Barañao, la Ministra de Industria Débora Giorgi y el Minsitro de Salud Juan Manzur. Una gran puesta en escena para demostrar que podemos entrar en el mundo de las grandes ligas. Pero nosotros no vamos a tener monoclonales para venderle a Monsanto. Tampoco vamos a tener vacunas milagrosas en sociedad con el laboratorio Novartis.

Lo mismo ocurre en la Universidad: redes de divulgación científica, de gestión en tecnología, están bajo la advocación de la figura de Oscar Varsavsky, pero lo que dicen y hacen no tiene que ver con su pensamiento. Traicionan la investigación, al subordinarla al mercado productivo. Después de todo lo que hizo Quique Martínez al frente del INTI³ en relación con las pymes y con los movimientos sociales, el hecho de que se haya tenido que ir significa que el INTI va a volver a funcionar al servicio de las grandes empresas. Y que el INTA⁴ preste sus laboratorios para que Monsanto haga sus pruebas en Castelar, es la medida de una idea de desarrollo que es colonial. Tecnópolis es la representación *in situ* de cómo la población se siente atraída por un relato exitoso, moderno, poderoso, pero también mentiroso. Me hace acordar a la “Argentina potencia”. Todos somos convocados a participar de esa maravillosa y grandiosa épica: la creación de una mística, aunque resulte una burbuja ideológica.

El Plan Fénix es otro espacio donde se construye una legitimación del modelo de manera muy inteligente. Por eso las interpelaciones al sentido del discurso hegemónico requieren contestaciones firmes y sagaces. Si invocan a Varsavsky, corresponde desmontar ese discurso difundiendo lo que en verdad decía Varsavsky; si hablan de biotecnología, hay que divulgar que siendo una construcción humana, la biotecnología no es neutra y tiene sentidos definidos dentro del capitalismo; y si hablan de genética salvacionista, hay que decir

3 Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

que la genética que invocan no sirve más que para sustentar los desarrollos tecnológicos. Lo mismo deberíamos hacer con otros lugares de disputa en la ciencia, la nanotecnología, la informática. Todos territorios que la sociedad venera, sin reflexión crítica.

El país está puesto en un lugar subsidiario de un modelo global indiscutido, y eso no es soberanía sino colonialismo. Para hablar de soberanía hay que tener la capacidad de responder a las demandas del mundo de una manera diferente y no aumentando o acelerando los procesos de transnacionalización de la economía o del comercio de alimentos y la concentración del control de los territorios y de la producción. Si consideramos, por ejemplo, lo que ocurre a nivel regional y con la cooperación sur/sur de los países del bloque BRIC (Brasil, Rusia, India, China), todavía no están claras qué nuevas dinámicas no capitalistas se podrían generar. Y los pueblos no parecen mirar o inspirarse en esas construcciones geopolíticas cuando defienden sus espacios y luchan por la defensa de los bienes comunes. El BRIC es una construcción en marcha de un nuevo polo de acumulación capitalista. Las formas de explotación son similares y, en todo caso, no cuestionan las injusticias que hoy recorren el mundo. Más bien se preocupan por afianzar el control de territorios y la apropiación de las riquezas que hasta ahora han sido controladas por el eje Europa-EEUU. Si estas confrontaciones crearán fisuras aprovechables para nuevos sujetos políticos está por verse. No visualizo una sensibilidad capaz de captar la actual crisis civilizatoria, en pos de impulsar nuevas corrientes epistémicas que lleven a procesos emancipatorios como los insinuados en los sesenta y los setenta. Me temo que estamos en una meseta sin sujeto político a la vista. Salvo aquellos núcleos de resistencia que, en el territorio, desafían el centro epistémico de la razón instrumental y rechazan, con embrionarios discursos, 400 años de dominación de la subjetividad. La administración que encarna el Estado no es neutral. Cuando se dice “crecimiento indefinido con inclusión” se está tomando una definición, y se supone que esa máquina

tiene que seguir funcionando cueste lo que cueste. Nosotros hemos elegido una manera de insertarnos en el mundo a expensas de la explotación de los bienes comunes. No creo en esto de un bloque latinoamericano, ni en las bondades del capitalismo chino versus el capitalismo norteamericano. Si nosotros elegimos este modelo, y hacemos pelota nuestro territorio, la ecuación es simple. Aquí hay una decisión política y muchos sectores sociales participan de ella a través del consumo. La minería, la agricultura con transgénicos, la ganadería intensiva, son los insumos del modelo. Y no hay posibilidad de salir de la dependencia a partir de este esquema. Volvimos al discurso que dice que a través de la tecnología vamos a llegar al primer mundo. En la Universidad y en el campo científico, este país requiere una masa crítica que mantenga viva la discusión.



FOTO: EDUARDO MOLINARI 2013

CRÍTICA DEL UTILITARISMO UNIVERSITARIO

ENTREVISTA A MARCELO RUIZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC)

El 5 de diciembre de 2007 a las diez horas explotaron 13 tambores en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, que contenían 2.600 litros de hexano. Dicho solvente era utilizado por el Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos Oleaginosos, dependiente del Departamento de Tecnología Química, en el marco de un convenio con la empresa De Smet Saic (trasnacional con sede en Bélgica especializada en la producción de aceites). ¿Qué nos dice este hecho sobre la vinculación actual entre la Universidad y los agro-negocios?

No voy a abordar la problemática de las causas y las responsabilidades en relación a la explosión ya que, actualmente, estamos inmersos en un proceso judicial de gran complejidad y con un alto número de actores institucionales. Sí quiero referirme a la valoración de este proceso, que tiene gran importancia: en primer lugar, porque se llegó a la etapa de juicio oral (en Argentina suele no ocurrir y las causas prescriben); en segundo lugar, por el tipo de instancias garantistas que atravesamos; y en tercer lugar, por las consecuencias en términos de políticas de seguridad laboral que este juicio puede tener para el conjunto del Estado y los trabajadores, abriendo nuevos caminos para repensar, rever y reformular

dichas políticas desde las propias organizaciones sindicales.

Enfatizo un aspecto inédito, es la primera vez en la historia que un sindicato, en este caso la Asociación Gremial Docente de la UNRC, en representación de un interés colectivo, participa como querellante en un juicio de esta envergadura, generando un precedente de valoración positiva de las representaciones colectivas, democratizando el proceso mismo. El trabajo no puede estar asociado a la muerte como en nuestra experiencia de Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería sino que, por el contrario, el trabajo debe pertenecer al orden de la vida, del placer-deseo del sujeto, de la conciencia y jamás de la alienación, menos aún de la muerte.

Abordo ahora algunas ideas en relación a tu última pregunta. Quiero realizar antes algunos encuadres generales para establecer los núcleos conceptuales, de tal modo de precisar la semántica de algunos términos como así también ubicarlos en los marcos teóricos y metodológicos (estrechamente asociados, casi indisolublemente) de los que parto.

El modelo de los agro-negocios es una de las actividades que forman parte de la estrategia del gran capital, en su fase imperial y de carácter monopólico, que contemporiza la “fase de desposesión” con otras “formas de acumulación”. David Harvey en un conocido trabajo llamado “El nuevo imperalismo, acumulación por desposesión” sostiene que, cuando Marx habla de acumulación originaria del capital, incluyendo la expulsión del campesinado de sus tierras, la reconversión (obligada) de derechos colectivos de la tierra a formas privadas, deja abierta la posibilidad de que no se trata de algo históricamente delimitado. La acumulación originaria es una fase contemporánea de la acumulación ampliada, que coexiste con otras instancias de valorización capitalista. Este abordaje de Harvey, en algún sentido, también lo anticipa Karl Polanyi en su texto “La gran transformación”. Dicho en otros términos, las formas más sofisticadas de acumulación conviven con formas originarias, y Harvey en lugar de llamarles originarias le llama “por desposesión”. De este modo, y cito textualmente “*La reciente depredación de los bienes*

ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía.”

Disculpá por ser reiterativo, pero lo que no hay que perder de vista es que el extractivismo forma parte de una mundialización de la dinámica del capital que, desde mi punto de vista, sigue estando comandada (en clave compleja, claro) por los bloques dominantes de los países de la tríada EEUU, Europa y Japón, en los cuales los Estados juegan un papel decisivo, y que la hegemonía de este proceso es todavía profundamente estadounidense; adhiero a esta perspectiva, que es la misma de Samir Amin, entre otros intelectuales. No estoy haciendo mención al problema cultural al que aluden las críticas al eurocentrismo, dentro de las cuales algunas corresponden a las realizadas por los denominados estudios poscoloniales.

La construcción de alternativas al agro-negocio implica resolver problemas importantes, como el de la democratización de la propiedad de la tierra, del control popular de la comercialización, de nuevas formas comunales de producción, modos tecnológicos que abonen una agricultura no “extractivista”, una ciencia que promueva otros dispositivos tecnológicos. Ahora bien, esto supone una salida no sólo del modelo de agro-negocio sino del extractivismo y más generalmente transitar un desarrollo alternativo al que impone la mundialización capitalista; caso contrario la tendencia monopólica del capital es lo que prevalece.

Estamos obligados a pensar o repensar nuevamente los modos de transición de la propiedad privada a la propiedad colectiva y esto es imposible, en términos geopolíticos, sin alianzas en bloques regionales. De allí la importancia de los procesos de integración que estamos transitando en nuestro “Sur” y, en particular, en América Latina. Al mismo tiempo, dicha transición requiere de una reformulaciones del estado, de sus políticas y de una creciente hegemonía de los sectores populares, al menos primero en una etapa política y cultural para,

posteriormente, ir reconfigurando el campo de la economía.

Sin esas reformulaciones se corre el riesgo de una vuelta al neo-desarrollismo, de plantear el problema de las alternativas a la mundialización capitalista en términos social-demócratas, que jamás han sido alternativas ni para los sectores populares en el “norte” ni para los del “Sur”, coordinadas estas últimas en las que nos encontramos nosotros. No hay alternativas para construir un desarrollo con justicia social y ambiental que no sea anti-imperialista y por ende no-capitalista.

Y, volviendo a tu pregunta original, claro que muchas unidades académicas en las universidades han sido (y lo siguen siendo) promotoras de los modelos extractivistas tanto en Argentina como en América Latina. Ya volveremos sobre el tema más adelante con más detalle, complejizando el abordaje para no caer ahora en un análisis simplista que en nada ayudaría, ya que se hace necesario ir incorporando algunas mediaciones.

En un reciente encuentro con los amigos de Vía Campesina, un compañero del Movimiento Nacional Campesino

Indígena dijo que las Facultades de Agronomía de las Universidades Nacionales jugaron un rol muy favorable al complejo agroindustrial durante el proceso multisectorial de elaboración del Plan Agroalimentario Nacional.

¿Hasta qué punto es cierto que una parte del sistema público de investigación está al servicio de las empresas del sector, y se rige por una idea de la tecnología similar a la que el mercado propone?

No me animaría a generalizar, pero claro que las tendencias mercantilistas de la educación que se volvieron hegemónicas en los noventa, nos dejaron profundas huellas en los dispositivos académicos, en los modos de organización institucionales y en los vínculos construidos tanto al interior de las universidades como con el territorio. Y claro que existen unidades académicas que activamente trabajan a favor del agro-negocio.

Veamos un poco más en detalle este proceso de mercantilización del que te estoy hablando. El mismo se enmarca en la globalización neoliberal que opera en el plano mundial, desde

los denominados países centrales a partir de la década del ochenta, que tiene diferentes impactos según las regiones del mundo, con una línea que vertebra una propuesta general de debilitamiento de la educación pública en tanto derecho social y que, en particular, para la educación superior se propone convertirla en un negocio de alta rentabilidad. En los países donde mayoritariamente la producción científica se realiza en estas instituciones de educación superior, los criterios y los modos de investigación también son reconvertidos. La propuesta de los noventa en nuestro país fue muy “fecunda” para los intereses del gran capital transnacional y sus aliados internos, dándole continuidad a las transformaciones que ya había iniciado el bloque hegemónico durante la etapa de la dictadura cívico-militar del 76 (y nos podríamos remontar al golpe del 55), que no sólo operan en el campo educativo sino que, reubicando al mismo en el escenario de la desestructuración de lo que conocimos como estado de bienestar y de la fractura profunda, o peor, fragmentación de la clase trabajadora nos va a dejar un país devastado desde la perspectiva popular, emancipatoria. Te recomiendo la lectura de las producciones del equipo conducido por Silvia Llomovatte en la UBA; este equipo investigó la relación entre universidad y empresa, en los 90 y sus persistencia en las décadas posteriores.

Se instala como sentido común (a lo Gramsci) un lenguaje que convierte a los vínculos y al objeto de conocimiento en una relación clientelar y en un objeto a ser mercantilizado. Incorpora nuevos tipos de regulación del trabajo docente, subsumidos en un modo de evaluación institucional que poniendo el acento en la calidad, la eficiencia y el mercado, debilita derechos, precarizando el trabajo, homologa producción del conocimiento científico a circuitos de validación de “productos” (papers) y, por ende empobrece la complejidad de esta producción y las meta-reflexiones que piensan dicha complejidad, reduce los vínculos educación superior-territorio a educación superior-cliente-empresa y, como horizonte general fragmenta el sistema educativo. En Argentina este proceso tuvo gran resistencia y fue menos exitoso que en

otros países, como por ejemplo en Chile. Aquí, en nuestro país, tanto los trabajadores docentes como el movimiento estudiantil dieron una batalla simbólica y material que impidió que el formato mercantil grosero del neoliberalismo (algunos denominan conservadurismo en educación) triunfara en forma definitiva; no obstante esto no implicó que muchas de sus formas continúen existiendo hasta el día de hoy de manera ordenadora de los modos de existencia institucional. Es claro que la etapa actual en América Latina y en Argentina no es la misma que en los noventa, pero la persistencia de estas retóricas y prácticas hace que todavía en las universidades el proyecto académico-científico-cultural, por ende político, no esté signado por preocupaciones tales como la reconstrucción de las “presencias” populares, la perspectiva anti-imperialista, la problematización profunda de la producción científica en relación a nuevos modos de desarrollo alternativos a los de la mundialización capitalista, etc. Las huellas que dejó la combinación de los proyectos de la dictadura del 76, la débil reconstrucción democrática en los ochenta y el golpe asestado por el neoliberalismo de los noventa son profundas; no se desestructuran sólo desde el interior de la propia universidad y tampoco en un corto plazo; configuraron estructuras institucionales, determinaron subjetividades e instauraron “visiones del mundo”. Voy a enfatizar ahora un tema que creo importante aprehenderlo en su profundidad y complejidad. Y para ello hay que debatirlo sin tapujos. Hay una relación muy estrecha entre la perspectiva neo-liberal en educación y la matriz neo-desarrollista más general, como perspectiva de construcción del orden social, económico y cultural. En un artículo de Edgardo Lander, llamado “Marxismo, eurocentrismo y colonialismo”, se vincula al desarrollismo con el neoliberalismo en tanto ambas propuestas son parte de la ideología del eurocentrismo. Dicha tesis es correcta, no obstante necesita contar con determinaciones concretas para comprender cómo el desarrollismo (y el neo-desarrollismo actuales) interpela a las universidades, moldeando sus sentidos últimos y reformulando

sus proyectos, de tal modo que la única salida a la construcción de conocimientos, a su relación con el campo social y a sus propuestas académicas (grado y posgrado) está signada por una ideología productivista. No estoy planteando que la universidad no deba ocupar un lugar preponderante en el debate sobre la producción, sobre la problemática del desarrollo, etcétera; me refiero a que la “ideología desarrollista” le imprime al conocimiento un sentido completamente utilitario, de relación pragmática con el mundo y, por ende, descontextualiza (despolitizando) el análisis de los contextos de legitimación y de aplicación del mismo. Afirmo, antes de continuar, que neoliberalismo y desarrollismo son ideologías profundamente solidarias, más que complementarias. Marilena Chauí, importante intelectual brasileña, militante comprometida con los procesos de liberación, sostiene en su artículo “La universidad pública bajo una nueva perspectiva”, a propósito de la reforma que el neoliberalismo imprimió a la educación, que la misma fue ubicada como un servicio susceptible de ser privatizado y definió a la universidad como “organización social”, liquidando su constitución anterior que era del orden de la “institución social”. Y esto es clave, porque una organización, dice ella, se distingue de una institución por constituirse como una práctica social guiada por el principio de instrumentalidad. Una organización se rige por las ideas de gestión, planeamiento, previsión y éxito. Ella dice, si estamos guiados por este principio de instrumentalidad no nos compete cuestionar nuestra propia existencia, nuestra función, nuestro lugar en la lucha de clases. Lo que para la institución social universitaria es exigencia de ser pensado como obligación ética y política, para la organización constituye un hecho del orden de lo dado.

La universidad se convirtió, agregaba, en una unidad operacional que se estructura a partir de esquemas ajenos a la producción de conocimiento. La productividad ordena o moldea sus lógicas de legitimación (de producción del campo en el sentido de Bourdieu). Textualmente, dice Chauí: “la heteronomía de la universidad autónoma es visible a simple vista, en el aumento

insano de horas/aula, la disminución del tiempo para maestrías y doctorados, la evaluación por la cantidad de publicaciones, coloquios y congresos, la multiplicación de comisiones y reportes, etcétera. En ella, la docencia es entendida como transmisión rápida de conocimientos, consignados en manuales de rápida lectura para los estudiantes, preferentemente ricos en ilustraciones y con copia en CD-ROM”.

En definitiva, repensar hoy la universidad requiere rechazar el tipo de heteronomía que el desarrollismo o la perspectiva productivista sigue todavía proponiendo a la relación entre conocimiento y realidad, un vínculo de tipo instrumental.

Reitero, no estoy planteando que la universidad no esté vinculada a la producción; lo que rechazo es que la universidad esté gobernada por criterios utilitaristas que reducen la producción al productivismo en boga en el marco de la mundialización capitalista. Estamos obligados, si queremos sostener una perspectiva revolucionaria, a revisar seriamente la relación entre sentido humano, relaciones sociales de producción, conocimiento, educación y naturaleza.

¿Puede decirse que hasta los primeros años de este siglo la Universidad Pública parecía abstenerse de todo involucramiento en el sistema productivo, o ya existían previamente mecanismos de subordinación del conocimiento por la empresa? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Ciencia y Tecnología en este sentido, y del resto de los organismos como el INTA, el INTI, etc.?

¡Qué pregunta! A ver, no se puede desconocer en nuestros países de América Latina la existencia de diversas matrices como la nacional y popular, la autonomista, la de las izquierdas más tradicionales, la indigenista, que han conformado un campo de debate y de construcciones de propuestas desde el campo popular muy complejas; no hay unicidad de soluciones. Hay que sumarle a esto los procesos de reproducción de los campos económicos, sociales y culturales conducidos por los bloques hegemónicos. Esto provoca (y lo sigue haciendo actualmente) que las relaciones entre ciencia, tecnología y vínculos con la

esfera de la producción quedara “opacada” y que sea necesario realizar un “rodeo” en el sentido de Kosik para comprenderlas. Pensemos en los debates que se retoman de las etapas anteriores; para poner un ejemplo, en las publicaciones de “Ciencia Nueva”, en las convergencias entre Manuel Sadosky y Oscar Varsavsky (como algunos de los representantes de aquel momento), pero también en sus profundas divergencias. Hoy podemos retomar aquellos debates en contextos más claros, por las investigaciones subsiguientes en los ámbitos académicos institucionales universitarios y también por las novedades teóricas y prácticas que los movimientos sociales han creado en su propio seno y también sobre las instituciones. Hace rato me hablabas de Vía Campesina, una organización que ha impactado profundamente en el debate sobre la relación ciencia-desarrollo-tecnología-sujetos, y no sólo en el plano de la agricultura.

Te cambio un poco el eje, para analizar ciertos caminos que transitó la universidad argentina a propósito de las relaciones entre esta institución y la producción en cierta etapa de la historia. Al inicio del siglo XX el vínculo universidad-sociedad estuvo signado por el modelo de “Universidad como Torre de Marfil” y, posteriormente, aunque por momentos contemporánea, de la “Universidad como Faro de la Cultura”. La problemática de la producción y el desarrollo del país hasta entonces no era el centro de la preocupación institucional. Cuando vos pensás la proclama de la Reforma del 18 lanzada desde la Universidad Nacional de Córdoba, aún con todos sus límites a los que critico, está dirigida contra un tipo de universidad que es “Torre de Marfil”, donde la garantía de “objetividad” es su “alejamiento del mundo”. Por supuesto que este planteo no resistió ni los cambios políticos, económicos y culturales de la etapa, ni tampoco los replanteos profundos en los campos epistemológico, filosófico y sociológico. Incluso te diría que al modelo de universidad como “Faro de la Cultura” le asestó un duro golpe la perspectiva pragmática del mercantilismo de la década del noventa. Aquí identifico una línea de quiebre sustancial para comprender la relación entre universidad y perspectiva mercantil.

Hoy hay importantes debates al interior de los ámbitos estatales que vos mencionás; me refiero a los ministerios y también a organismos tales como el INTI, el INTA, donde coexisten visiones neo-desarrollistas con otras de corte crítico. Aspiro a que la propia dinámica de las organizaciones sociales, sus voces fuertes en el escenario nacional y latinoamericano le impriman una dialéctica a la noción de “desarrollo” que nos saque de las esas tentaciones neodesarrollistas.

¿Existen sujetos o fuerzas capaces de señalar críticamente este giro en la función social del conocimiento?

Sí, los movimientos sociales, y por supuesto el movimiento estudiantil en conjunto con los sindicatos no corporativistas; también existen diferentes colectivos en las universidades y fuera de las mismas que hoy están debatiendo, por ejemplo, la problemática que involucra el desarrollo, la ciencia, la tecnología y su interrelación. Cuando Boaventura de Sousa Santos plantea el diálogo de saberes, lo debemos tomar muy en serio: allí hay claves para pensar la construcción de alternativas. Creo que en esto tenemos una tarea colectiva a ser realizada, que consiste primero en trazar una “cartografía de las alternativas”; me refiero a aquellas experiencias de investigación, de producción intelectual en sentido amplio, enroladas claramente en perspectivas emancipatorias, en el conjunto de las universidades y fuera de ellas también, que hoy estén pensando la problemática a la que me refiero. Este mapa o cartografía nos mostrará que no son pocos los grupos críticos. En segundo lugar, este trazado del mapa debe convertirse en un espacio de mutua referenciación para ser luego un movimiento importante, configurando una densidad político-intelectual de fuerte incidencia en las problemáticas que estamos debatiendo nosotros ahora en este reportaje.

Nos gustaría escuchar tu opinión, como rector de una Universidad Nacional, sobre el rol que juegan las facultades menos involucradas en la investigación aplicada, como las ciencias sociales, humanidades, arte, etc. ¿Qué papel cum-

plen, en tu percepción, los saberes que no suelen ser movilizados por este modelo de desarrollo? ¿Es posible trazar un vínculo de nuevo tipo entre conocimientos estratégicos, producción y modelo de país? ¿Existe en la actualidad otro tipo de aplicación de las investigaciones que no sean regidas por los criterios mercantiles?

Es obvio que siempre existe una relación, nunca mecanicista, entre modo de producción, ciencia y tecnología; y este vínculo es mucho más estrecho en la etapa actual de la mundialización capitalista, entendiendo por actual desde mediados del siglo XX hasta hoy. Digo esto porque las ciencias han sido y son profundamente atravesadas por la dinámica de dicha mundialización, tanto en la dirección general de sus producciones como en los propios modos de producir.

En este sentido todos los campos disciplinares son objeto de disputa, aunque en diferentes formas. Si pienso en el proyecto neoliberal, creo que en su momento de máxima expresión en nuestro país y en América Latina, entre los ochenta y los noventa inclusive, se produjeron cambios de gran importancia en el campo científico, en general en el campo académico, en particular en nuestras universidades. Las ciencias sociales y humanas fueron atravesadas por un tipo de corriente que privilegiaba el método antes que el objeto; ya conocemos la crítica que formula de manera brillante Bourdieu, además de la fuerte marca de los estudios culturales a los que Eduardo Grüner, por ejemplo, analiza críticamente. Las ciencias “exactas” tampoco estuvieron ajenas a la profunda colonización neoliberal, particularmente a partir de la relación entre ciencia-aplicación-mercado, bajo la forma de la denominada venta de servicios, que por su parte también involucró a las ciencias sociales y humanas. Vuelvo al problema que enuncié antes, fue el neoliberalismo quien liquidó cualquier pretensión de universidad como “Torre de marfil y “Faro de cultura” para perfilarla como “Fábrica de profesionales”. Esa misma impronta es la que nos va a dejar instalada la actual tendencia de corte claramente neodesarrollista que direcciona al conjunto de las ciencias.



FOTO: EDUARDO MOLINARI 2013

EL FETICHE “CIENTÍFICO”

**POR DIEGO MONTÓN (INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL
CAMPEÑO INDÍGENA / VÍA CAMPESINA)**

El resultado de la batalla de Pavón consolidó la hegemonía de la oligarquía terrateniente sobre la política argentina. En estrecha alianza y subordinación al imperialismo de turno, estructuró un modelo agrario dependiente y orientado a la exportación, con un relato de la realidad y la historia que da por sentada la exterminación de la “barbarie”. Esta elite logró instalar la idea de que en Argentina no hay campesinos, ni indígenas, y que el Estado solo está para proteger a los propietarios de la tierra, nunca para regular su función social, y menos aún los mercados agroalimentarios. En general, una gran parte de la academia y el sector científico de nuestro país quedarán formateados por estos dogmas oligárquicos. En el mejor de los casos, la “*ciencia progresista*” reconocerá a los “chacareros” como sujeto social subalterno, incorporando denominaciones como “pequeño productor”, “minifundista”, etc. En ese contexto, la academia pasó décadas sin profundizar sobre la realidad de las mayorías rurales de nuestro país, campesinos, agricultores familiares, indígenas, dejando afuera también sistemas de producción y organización social milenariamente americanos. Sin embar-

go, como lo señalara Scalabrini, los hijos de los inmigrantes “civilizados” fueron seducidos y convertidos a la “barbarie” por el *espíritu de la Tierra pampeana*¹. Hubo excepciones intelectuales, entre los que podemos mencionar a Rodolfo Kush y Francisco René Santucho, que miraron a nuestra Argentina desde el campo profundo.

El primer gobierno peronista intentó abordar la cuestión rural. Perón incluso habló de una Reforma Agraria de corte revolucionaria. En uno de sus discursos dijo: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y la devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora”².

Pero solo se avanzó en el Estatuto del Peón Rural, y cuando en la constitución del 49 se introdujo la función social de la tierra, la reacción violenta y antidemocrática no se hizo esperar.

El IAPI³ y el control de cambio diferencial fueron otras medidas con los cuales el peronismo intentó regular al modelo agropecuario. Nuevamente será la violencia y el golpe militar lo que pondrán fin a estas experiencias. Mostrando que el imperialismo y la elite oligárquica no están dispuestos a ningún tipo de límites al desarrollo del capital en la agricultura. Desde que el neoliberalismo tomó las riendas del país, más de 30 años pasaron para que el Estado vuelva al menos a plantear la discusión sobre la renta agropecuaria. El gobierno de Cristina Kirchner, luego de la derrota sufrida en la disputa por la 125, propuso discutir e implementar una Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con la idea de que el Estado vuelva a tener un rol destacado en la planificación y regulación del modelo agroindustrial.

1 Mencionado por Mario Latuada, en *Política agraria peronista* (1943 1983) CEAL.

2 El Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, organismo estatal creado en 1946, funcionó bajo la órbita del Banco Central con el objetivo de regular de manera centralizada el comercio exterior y redistribuir la renta entre los distintos sectores de la economía, a favor de la industria nacional.

3 Entidad que reúne a las cuatro principales Cámaras de productores agropecuarios del país: la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, La Federación Agraria y CONINAGRO.

La reacción no se hizo esperar, la Mesa de Enlace calificó la propuesta como “un plan marxista” y no participó de las instancias de discusión. Al menos formalmente. Sin embargo, el resultado final del PEA, en su contenido, es a la medida de los agro-negocios. ¿Cómo es que este “plan marxista” se convirtió en una estrategia de subordinación al capital financiero, con la consecuente exclusión de los campesinos y agricultores familiares?

Las Universidades y las instituciones “científicas” jugaron un rol clave y tuvieron una fuerte participación en el diseño del PEA. El desfinanciamiento neoliberal favoreció la cooperación ideológica y cultural de claustros, cátedras y grupos de “investigación” agropecuaria, que vieron una salida en los programas de ciencia que brindan los agro-negocios. De esa manera, en muy poco tiempo, agrónomos, veterinarios y científicos adoptaron los paquetes tecnológicos de las transnacionales sin ningún tipo de cuestionamientos.

El principal objetivo de las corporaciones transnacionales es mantener los niveles de acumulación de capital, y para ello apelan a lógicas especulativas que requieren dominar a los distintos mercados y, en general, a la cadena agroalimentaria global. Una hegemonía de estas dimensiones precisa además de la colaboración de los Estados nacionales. La estrategia de subordinación cultural que detentan las transnacionales se basa en un *fetichismo*: la noción de que su propuesta tecnológica es el resultado del avance objetivo y unidireccional de la ciencia. Y que la lucha contra el hambre constituye el punto de partida de la revolución verde primero, y la transgénica después. Falso: mientras una tuvo que ver con la infraestructura ociosa heredada de la segunda guerra mundial (varios segmentos de la industria bélica se reciclaron en industria agrícola), la otra es consecuencia de la crisis internacional y la fusión de corporaciones como Monsanto (líder mundial en producción de Organismos Genéticamente Modificados) con segmentos de la banca internacional (hace poco se conoció que la Fundación *Bill and Melinda Gates*, la más grande del mundo, compró acciones de Monsanto y de Cargill).

La constitución de los mercados globales de productos transgénicos fue la puerta de acceso para que enormes cantidades de capitales con origen en la especulación financiera se apropien de los mecanismos de comercialización de alimentos.

Mientras tanto, la mal nutrición mundial nunca disminuyó; por el contrario, aumenta. Al mismo tiempo, la tecnología trasnacional avanza con la destrucción de sistemas locales de producción de alimentos. Reemplazando la mano de obra por el uso intensivo de agro-tóxicos, esta propuesta se convierte a su vez en una gran amenaza para el ambiente y la salud humana, estableciendo una dinámica de éxodo rural que reconfigura los territorios, despoblándolos para dejarlos a merced de las corporaciones.

Llama poderosamente la atención que el PEA omite cualquier mención al lugar que ocupan las corporaciones transnacionales en nuestro modelo agropecuario. Ni las menciona.

Ni en su rol de proveedoras de insumos y tecnología, ni en su rol oligopólico en los mercados de granos nacionales y globales. Tampoco habla de su capacidad de presión sobre las bolsas de valores y mercados a futuro. Resulta difícil establecer un programa estratégico capaz de subordinar el modelo agropecuario a los objetivos de un proyecto de país basado en los principios de justicia, igualdad y soberanía, sin caracterizar a los principales factores que controlan la producción agraria.

En el proceso de elaboración del PEA, las Facultades de Agronomía y Veterinaria y los institutos de investigación como el INTA, tuvieron un lugar preponderante. No así las organizaciones campesinas, que fuimos convocadas sólo a las mesas de carácter “social”, donde hubo poco margen para establecer los debates que la situación requería. Por eso el resultado es un *Estado neutral*, que apenas plantea “industrializar la ruralidad”, sin proponer herramientas de desarrollo e impulso a tecnologías soberanas que apunten a recuperar el rol social de la agricultura, la producción de alimentos sanos y a precios accesibles para el mercado interno, en forma sustentable, generando empleo digno, garantizando

la permanencia de la población en el campo, y estableciendo mecanismos de apropiación social de la renta obtenida en el mercado externo.

El PEA se centró en la productividad y la rentabilidad, gran error “academicista” neoliberal. En el marco de la crisis global, el capital financiero se abalanzó sobre la agricultura y los bienes naturales en busca de nuevas mercancías. Esa ofensiva en nuestro país significó que entre 2001 y 2010, la producción de granos se duplicó, apuntando a menos productos, menos diversificación, menos mercado interno, menos mano de obra en el campo. Duplicar la producción cerealera en los próximos veinte años, como propone el Plan Agroalimentario, no hace más que ratificar esa tendencia. ¿Y cuáles son los sujetos de la industrialización rural que se pretende? Otra vez la academia obvia mencionar lo evidente: que en el marco de la propuesta tecnológica de las transnacionales, la mano de obra tiene un lugar marginal y en muchísimo casos se emplea trabajo en negro o esclavo. Y apenas mencionamos la existencia de dos modelos diferentes de agricultura, e inmediatamente nos responden que no son contradictorios.

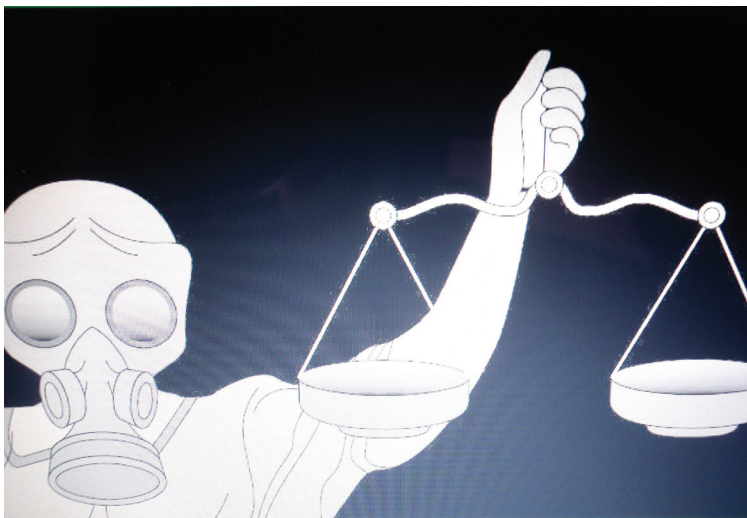
Agricultura campesina, de base agroecológica, para construir la Soberanía Alimentaria, es una propuesta que venimos construyendo desde la Vía Campesina, con aporte de diversos colectivos de intelectuales e investigadores que sugieren una perspectiva diferente de ciencia, sobre todo por el punto de partida. Desde dónde hacemos ciencia, y para quiénes. Desde dónde construimos conocimiento. La agroecología es una propuesta que parte de la experiencia popular, que coloca elementos centrales para una aventura tecnológica que recupere la esencia de una agricultura soberana y humanista. Lamentablemente hoy tiene escaso espacio en las universidades e institutos científicos nacionales, ya que investigar agroecología, investigar y proponer tecnología para campesinos y campesinas no es “negocio”.

En la disputa actual entre las propuestas del movimiento popular y las del capital financiero y sus aliados históricos

“nacionales”, las relaciones de fuerzas no permiten revertir la tendencia de las políticas públicas, no solo en el marco del

PEA, sino tampoco en la composición y estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, que es claramente funcional a los agro-negocios, a las corporaciones transnacionales, e incluso a la Mesa de Enlace. La situación es peor aún en el caso del Ministerio de Ciencia y Técnica.

En este marco, es fundamental plantear una batalla cultural, una pelea filosófica sobre el carácter de la ciencia, como parte del programa de lucha por el modelo agropecuario que requerimos. Hay una práctica y una sabiduría acumulada durante más de diez mil años de historia del campesinado, que históricamente alimentó a la humanidad. Ahí la ciencia tiene mucho para aprender y para aportar. Los movimientos campesinos estamos comprometidos en acompañar a quienes tomen esa elección, que sabemos es el camino más difícil para quienes se rigen por las “reglas” de la academia.



DOCUMENTO DEL ARCHIVO CAMINANTE 2013

Estos *Apuntes* hablan de un nuevo conflicto social que desarticula y transforma los distintos territorios de Argentina y de la región latinoamericana.

Son la expresión de una red de organizaciones sociales, de comunicación y de investigación, que se proponen mapear, visibilizar y politizar un conflicto cada vez más violento que, a pesar de estar situado en el corazón de las dinámicas de acumulación capitalista, permanece silenciado por los discursos oficiales.

Creemos que la investigación política y social puede ser una práctica de conocimiento, y al mismo tiempo, una dimensión organizativa, para la construcción de un nuevo lenguaje político y la creación de nuevas instituciones, contra la desertificación de las dinámicas comunitarias.

facebook
investigacionyexperimentacionpolitica
mail
investigacionyexperimentacion@gmail.com

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
Y EXPERIMENTACIÓN
POLÍTICA **IEP**